



NOTICIAS DEL EXTERIOR

BOLETIN SEMANAL DE
INFORMACIÓN INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

DOCUMENTO ANEJO

Nº 47 – 4.4.2002

RETOS PARA LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL

Londres, 25 de marzo de 2002

Organizado por la **COUNTRY LAND AND BUSINESS ASSOCIATION (CLA)** tuvo lugar, el pasado 25 de marzo, un debate abierto sobre **EL FUTURO DE LA PAC**.

El objetivo del debate era tener una discusión informal en torno al futuro de la agricultura europea, y permitió clarificar las opciones que la CLA está barajando como estrategia de influencia de cara al documento de reflexión que la Comisión deberá presentar el próximo mes de junio.

Algunos datos sobre la CLA

La CLA cuenta con unos 45.000 asociados, que representan aproximadamente el 60% de la superficie agraria de Inglaterra y Gales. Escocia tiene su propia asociación e Irlanda del Norte carece de ella.

Al nivel de influencia política en el Reino Unido, puede considerarse que dos asociaciones (la CLA y la National Farmers' Union) agrupan prácticamente la totalidad del lobby agrícola, con una capacidad de influencia similar, aunque más limitada que en la mayoría de los restantes Estados miembros debido al menor peso relativo de la PFA en el PIB británico.

REVISIÓN A MEDIO CAMINO DE LA PAC: PILAR 1 VERSUS PILAR 2

El debate consistió básicamente en una presentación de la postura de la CLA, y se puede resumir como sigue:

La CLA considera que la reforma de la PAC es inevitable tanto por razones internas (expectativas de la sociedad en lo referente a seguridad alimentaria y consideraciones medioambientales; enfermedades animales) como externas (ampliación y OMC), y que el status quo es la única opción impracticable. Todo ello apunta hacia una mayor desconexión entre las medidas de apoyo y la producción, insistiendo más que en el pasado en mejorar la calidad y remunerar los servicios medioambientales.

La nueva PAC debe subsanar las carencias permanentes del mercado, que no permite una adecuada gestión de las tierras agrícolas. Aunque está claro que el objetivo es una mayor desconexión, los medios para alcanzar ésta son mucho más complicados, aunque básicamente se resumen en dos opciones: condicionar las ayudas directas del actual primer pilar a objetivos medioambientales, o bien transferir fondos del primer pilar al segundo.

OPCIÓN 1: POTENCIACIÓN DEL SEGUNDO PILAR A COSTA DEL PRIMERO

El reglamento horizontal aprobado en la Agenda 2000 ha sido hasta la fecha utilizado, en lo referente a la modulación, solamente en dos Estados miembros (Francia y Reino Unido), y ello con una baja intensidad. Otros tienen intención de introducir la modulación próximamente o están considerando la oportunidad de hacerlo. En todos los casos se haría de forma francamente limitada.

La CLA considera que la modulación tiene algunos inconvenientes de suficiente importancia como para no compensar las ventajas que pueda reportar. Entre éstos cabe citar la dificultad para determinar si aquellas categorías de agricultores que perciben ayudas directas por debajo de una cierta cantidad no son, en realidad, agricultores a tiempo parcial, con unas rentas complementadas con otras completamente ajenas al sector agrario. Por ello, se corre el riesgo de que, por un supuesto tinte social, se transvasen fondos a agricultores poco eficientes desde un punto de vista productivo y medioambiental, ya que el pequeño agricultor no es necesariamente sinónimo de altos niveles de protección medioambiental.

La cantidad modulada no revierte necesariamente en los pequeños productores, que difícilmente mejorarán por esta vía su productividad ni podrán enfrentarse en mejores condiciones a los problemas estructurales (pequeño tamaño de las explotaciones, handicaps naturales). Sin embargo, la modulación pone en peligro la competitividad de todos aquellos agricultores a los que se les aplica, perpetuando la dificultad de crear mayores explotaciones, lo que va en contra del necesario aumento de la productividad y de los ingresos, mediante la consecución de un mínimo de economías de escala.

Aunque no fue explícitamente mencionado durante la reunión, subyace la preocupación de que es posible que lo que los gobiernos puedan ofrecer como ingresos adicionales a los agricultores por la vía de la modulación, sea sustraído de otras partidas del propio sector agrario, en cuyo caso sería, en el mejor de los casos, un ejercicio de suma cero que, simultáneamente, erosionaría la competitividad de la explotación agraria europea. Las distorsiones de competencia entre los agricultores de los distintos EEMM se obviaría haciendo que la modulación fuera obligatoria, pero ello no resolvería el problema de la pérdida de competitividad de la explotación agraria europea, que ha de competir en un mercado cada vez más abierto.

A pesar de todos estos inconvenientes, la CLA dice preferir la modulación obligatoria. Sin embargo, en un alarde de realismo, y teniendo presente la oposición de ciertos EEMM a la modulación obligatoria o a la degresividad, se inclinan por un sistema que permita impregnar de tintes medioambientales al primer pilar que, en todo caso, continuará constituyendo el grueso del apoyo al sector agrario.

OPCIÓN 2: RECONVERSIÓN DEL PRIMER PILAR

Generalización de ayudas vinculadas a objetivos medioambientales

La CLA considera que si la UE desea que el artículo 3 del reglamento horizontal de la Agenda 2000 (1259/99) tenga visos de ser aceptado en la OMC dentro de la categoría de pagos exentos de compromisos de reducción (caja verde), debe hacerse un claro esfuerzo para concretar los beneficios medioambientales y para que sus efectos positivos se sustancien en la mayoría de la superficie agraria de la UE, lo que no ocurre actualmente. En definitiva, se trataría de pasar del modelo actual, que tan sólo produce elevados beneficios medioambientales en lo que podría considerarse como "islas con ecosistemas casi privilegiados", a otro modelo en el que, reduciendo las pretensiones en términos medioambientales, sea posible diseñar un sistema que pueda ser suscrito por la mayoría de los

agricultores. No obstante, las exigencias medioambientales deben ir más allá que las ya existentes con carácter general.

Aunque no fue objeto de debate, una de las dificultades para crear este esquema se deriva de la necesidad de demostrar los beneficios medioambientales y los costes adicionales derivados de la suscripción por parte del agricultor de un determinado protocolo.

El nuevo sistema estaría lógicamente sometido a la necesidad de efectuar como mínimo el mismo tipo de control que al que actualmente son sometidas las ayudas directas de la PAC, probablemente con la dificultad añadida de que una auditoria medioambiental es ciertamente más compleja y quizá menos objetiva, ya que el sistema debe tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones locales o regionales. Aunque el esquema debe ser lo más sencillo posible, requerirá un especial esfuerzo administrativo en sus primeras etapas. En la medida en que el control debería ser simultáneo al de las actuales ayudas directas, no parece que a priori se deriven riesgos adicionales que pudieran abocar en correcciones financieras por parte del FEOGA, aunque habrá que estar atentos a la aplicación práctica de la flexibilidad.

Un tema que apenas fue abordado en el debate es el nivel de los pagos agroambientales del primer pilar, que sería por hectárea y que partiría del nivel de las actuales ayudas directas y pagos medioambientales, cubriendo la totalidad de los costes adicionales derivados de la suscripción del protocolo medioambiental por parte de los agricultores. Es decir, una parte de las actuales ayudas vinculadas a la producción pasaría a ser una ayuda medioambiental por hectárea.

La idea propuesta por la CLA es sugerente a primera vista y probablemente realista desde un punto de vista político, a la luz del calendario interno y externo de la UE. Sin embargo, en caso de prosperar, tendría en una primera aproximación importantes consecuencias para España que sería necesario analizar.

